

Santiago, tres de marzo de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, el abogado don Renato Fuentealba Macaya, actuando en representación de la querellante Forestal Arauco S.A, en la causa RIT 707-2021 del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, por los delitos de Hurto Simple, descritos y sancionados en el Art. 446 N°1 del Código Penal, en relación con el artículo 432 del mismo cuerpo legal, y Receptación, contemplado en el artículo 456 Bis A del mismo cuerpo legal, recurre de queja en contra de las señoras Ministras de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción doña Nicole D'alencón Castrillón y doña Nancy Bluck Bahamondes porque, a su juicio, habrían incurrido en graves faltas y abusos en el pronunciamiento del fallo de segunda instancia, de treinta de julio del año pasado, por el que decidieron revocar la decisión de primer grado y en su lugar acogieron las tercerías de dominio interpuestas por el abogado Cristián Toro Espinoza, en representación de Transportes e Inversiones Los Robles Ltda., declarando el dominio en favor de dicha persona jurídica del camión marca Volvo, modelo FM, motor D13809741A1E año 2008 color blanco, placa patente BPDP 12-4; del remolque, marca Caburga, modelo RFC 7.0, año 2005, número de chasis 001672, color rojo, placa patente JF.4193- K; del remolque, marca Mapar, modelo RTEA 7.2.2 r, año 2010, número de chasis 279610, color naranja, placa patente JK 7230-7; del remolque, marca MACHILE, modelo RFM 7. 2E, año 2006, número de chasis RFM3073, color rojo, placa patente JE 6241-4 y; del camión marca Volvo, modelo FMX 11, motor D11238379A1L año 2012 color blanco, placa patente DWBJ 50-5 y la tercería deducida por el mismo abogado en representación de don Mauricio José Sanhueza Opazo, declarando el dominio en favor de éste respecto del camión Marca Volvo, modelo FM12, del año 2006, placa patente ZR.7257 del año 2006. En virtud de lo anterior, las señoras Ministras recurridas ordenaron la



restitución de dichos bienes a los terceristas en cuyo favor se declaró el dominio.

La quejosa denuncia que las señoras Ministras recurridas dictaron sentencia con grave falta o abuso al incurrir en una apreciación errada de los antecedentes del proceso, pues afirma que no es efectivo que los terceristas no revistan la calidad de imputados o querellados, indicando que con fecha 24 de mayo del 2021, se efectuó una ampliación de la querella interpuesta la que se dirigió nominativamente -entre otras empresas - en contra de la Sociedad de Transportes e Inversiones Los Robles Ltda. Agrega la quejosa, que la investigación penal se encuentra vigente, en curso y existen diligencias pendientes dirigidas en contra de la empresa querellada y el imputado Mauricio Sanhueza Opazo, por lo que considera necesario mantener la incautación de los citados bienes en los términos del artículo 189 del Código Procesal Penal, esto es, hasta concluido el procedimiento atendido que estos fueron utilizados como medios para la comisión de los ilícitos de hurto y receptación.

Informando las señoras Ministras cuestionadas, sostienen que la mayoría de la sala resolvió en primer lugar reconocer el dominio de los vehículos y remolques a los terceristas y luego con los antecedentes que se tuvieron a la vista y que fueron acompañados por el apelante consideraron innecesaria la conservación de dichas especies de conformidad con lo previsto en el artículo 189 del Código Procesal Penal

En consecuencia, estiman no haber incurrido en falta o abuso grave tal como se denuncia, toda vez que lo resuelto corresponde al corolario de un proceso de razonar e interpretar las normas legales citadas y los antecedentes del proceso.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que según consta del mérito de los antecedentes, el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, rechazó en la audiencia de quince de junio del



año pasado, las tercerías planteadas por el abogado Cristian Toro Espinoza, en representación de Transportes e Inversiones Los Robles Ltda. y de don Mauricio Sanhueza, por no haberse acompañado la documentación idónea para acreditarlas, desestimando en consecuencia la restitución de los bienes solicitadas.

Las recurridas, conociendo de ese fallo por la vía del recurso de apelación de Transportes e Inversiones Los Robles Ltda. y de Mauricio Sanhueza, resolvieron revocar la decisión y acoger las tercerías deducidas para lo cual tuvieron en consideración que “no se encuentra incorporada prueba alguna en la que se desprenda que los citados bienes puedan ser de dominio de un tercero distinto a los terceristas requirentes”. Agregaron a continuación que “no habiéndose desvirtuado la presunción contenida en el artículo 44 de la Ley N° 18.290, procede en consecuencia, haciendo aplicación de dicha presunción no desvirtuada, acceder a la solicitud de los terceristas, declarando su dominio sobre dichos bienes”. Enseguida y en relación a la solicitud de devolución explicaron que, “el tribunal no advierte antecedentes objetivos que permiten presumir que la conservación de tales vehículos sea necesaria. En efecto, el fundamento, tanto de la querellante como del Ministerio Público, para oponerse a la restitución, se sustenta en diligencias que se pedirán, actuaciones que se realizarán, delito de comiso que podría configurarse, en suma, hechos o sucesos potenciales e inciertos, que a la fecha podrían ya haberse realizado, para fincar la oposición en circunstancias reales y constatables que pudieren dar indicios de la participación de los terceristas en los hechos delictuales investigados”. Luego señalaron que “lo concreto es que los terceristas no revisten la calidad de imputados o querellados por los hechos investigados, y a su respecto no existe ninguna determinada diligencia investigativa pendiente, razón por la cual los sentenciadores de mayoría no estiman necesaria la conservación de tales bienes, teniendo en consideración que como han



señalado los requirentes, estos vehículos constituyen para ellos instrumentos laborales y, que, además, se encuentran sujetos a deterioro por su retención”.

Segundo: Que es ésta la resolución que ha motivado la queja en estudio y en la que se estima por el recurrente se ha incurrido en las faltas y abusos graves que a su juicio ameritan la actuación disciplinaria de esta Corte para restablecer los derechos amagados.

Tercero: Que, como cuestión previa, conviene tener en cuenta que el recurso de queja, en tanto persigue modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales pronunciadas con falta o abuso, constituye un medio extraordinario destinado a corregir la arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho.

Cuarto: Que como evidencia una atenta lectura del recurso intentado, en éste se cuestionan las conclusiones que alcanzan las Ministras recurridas, para concluir la ausencia de antecedentes objetivos que permitan presumir que la conservación de tales vehículos sea necesaria y producto de ello ordenar la restitución de los bienes a los terceristas en cuyo favor se declaró el dominio.

Quinto: Que, en tal entendimiento, la decisión de las recurridas, contrastada con las argumentaciones de la quejosa, claramente representa una legítima diferencia en la determinación de si se considera necesario mantener la incautación de los vehículos de los terceristas en los términos del artículo 189 del Código Procesal Penal, diferencia que no llega a constituir una falta o abuso grave que amerite la interposición de un recurso de la naturaleza de que se trata.

Que es más, lo cierto es que las sentenciadoras ajustándose a los planteamientos esgrimidos por los intervinientes en torno a la procedencia de la devolución de los bienes incautados, calificaron los hechos del proceso, interpretando y dando aplicación a las disposiciones legales atinentes a la



materia, de manera tal que, como ha sostenido reiteradamente este Tribunal, el no compartirse una determinada posición frente al sentido o alcance de una norma jurídica no puede constituir falta o abuso grave que amerite la imposición de sanciones por la vía disciplinaria, pues se trata de la aplicación del derecho a los hechos sentados, actuación propia de la labor jurisdiccional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza**, sin costas, el recurso de queja interpuesto por el abogado don Renato Fuentealba Macaya, actuando en representación de la querellante Forestal Arauco S.A, en contra de las señoras Ministras de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción doña Nicole D'alencón Castrillón y doña Nancy Bluck Bahamondes, por la dictación de la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, en la causa Rol N° 567-2021 de dicha Corte.

Regístrese, y archívese.

Rol N° 56049-2021

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firman los Ministros Suplentes Sres. Biel y Vázquez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido ambos su período de suplencia.





En Santiago, a tres de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

